



Tipo de Documento: DT
Presentado por: Uruguay
Tipo de Sesión: P
Punto de la Agenda: 11

Cuestiones Relacionadas con el Ejercicio de la Jurisdicción en la Antártida

Cuestiones Relacionadas con el Ejercicio de la Jurisdicción en la Antártida

I) Planteamiento del problema

El Artículo VIII del Tratado Antártico establece que: "Con el fin de facilitarles el ejercicio de las funciones que le otorga el presente Tratado, y sin perjuicio de las respectivas posiciones de las Partes Contratantes, en lo que concierne a la jurisdicción sobre todas las demás personas en la Antártida, los observadores designados de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo VII y el personal científico intercambiado de acuerdo con el subpárrafo 1 b) del Artículo III del Tratado, así como los miembros del personal acompañante de dichas personas, estarán sometidos sólo a la jurisdicción de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, en lo referente a las acciones u omisiones que tenga lugar mientras se encuentren en' la Antártida con el fin de ejercer sus funciones " (Párrafo 1).

Expresa asimismo a continuación que: "Sin perjuicio de las disposiciones del subpárrafo 1 de este artículo, y en espera de la adopción de medidas expresadas en el subpárrafo 1 e del Artículo IX, las Partes Contratantes, implicadas en cualquier controversia con respecto al ejercicio de la jurisdicción en la Antártida, se consultarán inmediatamente con el ánimo de alcanzar una solución permanente aceptable" (Párrafo 2).

Por su parte el citado literal e) del subpárrafo 1 del Artículo IX establece entre las Recomendaciones a emitirle en las Reuniones Consultivas las "Cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida", lo que pone en evidencia que las Partes eran ya conscientes en el momento de celebrarse el Tratado, que la cuestión de la jurisdicción era un tema que requería ulteriores desarrollos.

No obstante la multiplicidad e incremento de las actividades de los Estados Partes en la Antártida que involucra incluso a personas de muy diversas nacionalidades y la presencia y acción en ella de personas ajenas a los Estados Partes del Tratado Antártico o no vinculadas a las actividades desarrolladas por ellos en el área, han puesto en evidencia en los últimos tiempos que sería necesario y oportuno desarrollar, aunque en forma muy simple, el régimen normativo en materia de jurisdicción.

En efecto, de acuerdo a la embrionaria normativa vigente y a las nuevas realidades, se está tornando imperioso prever normas complementarias en materia de jurisdicción sobre personas y bienes en la Antártida. De no procederse a ello se deberán enfrentar situaciones en que personas realicen acciones u omisiones sobre otras personas o sobre bienes ubicados en la Antártida, que queden en los hechos sin sometimiento a jurisdicción alguna, con todas las consecuencias y riesgos que ello supone para el buen funcionamiento y desarrollo del cada vez más complejo Sistema del Tratado Antártico.

Desde hace ya un tiempo los diferentes integrantes de la Base Científica Antártica "Artigas" del Uruguay, han venido planteando la necesidad de contar con normas generales más precisas a aplicar en materia de jurisdicción, frente a eventuales casos que pueden presentarse. Esto sobre todo teniendo en cuenta el aumento de personas que concurren a las Bases, con distintos objetivos o en diversas circunstancias, en especial lo que se ha dado en llamar "turistas o científicos de aventura", que en general pueden escapar a toda jurisdicción de los Estados Partes, y que hacen factibles graves problemas prácticos.

El tratamiento del Tema sobre "Turismo y actividades no gubernamentales", también tiene implicancias de carácter jurídico sobre este tema, una razón más que amerita su tratamiento.

En enero de 1992, un accidente ocurrido en la Base rusa Bellingshausen, en la -Isla Rey Jorge, en el que falleció un integrante de aquélla y en donde estuvo involucrado un integrante de la Base uruguaya, volvió a poner de relevancia la importancia del tema, y la necesidad de comenzar su análisis en el seno del Sistema del Tratado Antártico.

En consecuencia, se entiende conveniente comenzar el estudio de este punto, tendiente a lograr en definitiva nuevas normas de aplicación unánime por los Estados Partes. Con ello se evitaría que las Partes, exigidas por circunstancias perentorias y urgentes, regulen o apliquen criterios que obstaculicen el cumplimiento de los objetivos y principios del Tratado Antártico y el Sistema que el mismo ha erigido.

En particular se pretende la regulación de situaciones que no tienen al presente soluciones jurídicas ni prácticas, fundamentalmente en aquellos casos en que personas o instalaciones de los Estados Partes del Tratado se ven afectados por acciones u omisiones de nacionales de Estados que no son Partes en dicho instrumento, o de su nacionalidad pero no vinculados a la actividad de los mismos. Todo esto sin afectar las eventuales posiciones de las Partes.

II) Análisis de la normativa vigente y necesidad de su complementación.

En primer término, el citado artículo VIII del Tratado Antártico, somete a la jurisdicción de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, en lo referente a las acciones u omisiones que tengan lugar mientras se encuentren en la Antártida con el fin de ejercer sus funciones a "los observadores designados de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo VII y el personal intercambiando de acuerdo con el subpárrafo 1 B) del Artículo III del Tratado, así como los miembros del personal acompañante de dichas personas".

En consecuencia, nada se establece concretamente sobre:

a) El sometimiento a la jurisdicción de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, las dotaciones, el personal científico y demás personas que sean enviadas por ella al área del Tratado Antártico (por ejemplo autoridades o visitantes de otro tipo) en ejercicio y dentro del marco de las actividades que esa Parte cumple de conformidad con dicho Tratado, en lo referente a las acciones u omisiones de esas personas mientras se encuentran en la Antártida.

b) El sometimiento a la jurisdicción de la Parte Contratante, de las dotaciones, el personal científico u otro tipo de personas que no son nacionales de esa Parte ni de ninguna otra Parte Contratante y que son enviadas al área del Tratado Antártico en ejercicio y dentro del marco de las actividades que los Estados cumplen de conformidad con dicho Tratado, en lo referente a las acciones u omisiones de esas personas mientras se encuentran en la Antártida.

c) El sometimiento a la jurisdicción de la Parte Contratante de las personas que no son nacionales de ninguna Parte Contratante, no comprendidas en el literal anterior, y que en el área del Tratado Antártico realizan acciones u omisiones que afectan a esa Parte Contratante, o a las personas o bienes bajo su jurisdicción.

La hipótesis del literal a) ha sido interpretada y solucionada hasta el presente por los Estados Partes, por lógica extensión analógica, sobre las bases de la norma del artículo

VIII párrafo primero del Tratado, en una práctica que ha sido pacíficamente aceptada a lo largo de la vigencia del Tratado.

Sin embargo, las hipótesis de los literales b) y e), de más reciente surgimiento, son las que traen más problemas de interpretación y eventual solución, y el régimen de consultas previsto por el párrafo segundo del Artículo VIII citado, sin perjuicio de abrir un camino de solución, no parece en primera instancia adecuado para la adopción de medidas perentorias que deban tomarse.

Se estima que la regulación normativa de dichas hipótesis sigue siendo coherente con el objetivo establecido en el artículo VIII de facilitar el "ejercicio de las funciones que le otorga" el Tratado a las Partes Contratantes y sin perjuicio de sus "respectivas posiciones... en lo que concierne a las jurisdicciones sobre todas las demás personas en la Antártida".

El propio texto del Tratado, reconoció ya originariamente que las normas que establecía sobre jurisdicción eran embrionarias. En efecto, visionariamente, como lo fue en distintas temáticas esenciales, enumeró en el literal e) del artículo IX Numeral 1 como uno de los cometidos de las Reuniones Consultivas resolver cuestiones "relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida", enfatizando uno de los puntos que demandaría ulterior tratamiento, teniendo en cuenta el futuro desarrollo y complejidad de las actividades en el área.